

# 8

## HACIA UNA MAYOR AUTONOMIA SINDICAL

**L**A cita de Luis Figueroa en el capítulo anterior llama la atención sobre un problema al cual no hemos hecho referencia todavía, pese a que, sin embargo, tiene una importancia decisiva para la factibilidad de la concertación y la participación laboral. Alude al tipo de partidos políticos existentes, a la forma de relación entre cada partido y las centrales sindicales, y a la estructura misma de la organización sindical en cuanto al número de centrales y al grado de competencia o colaboración entre ellas. Todos estos factores influyen crítica-

mente en el grado de autonomía de las organizaciones, así como en su disposición o capacidad para entrar en la concertación.

No podemos tomar cada uno de estos temas en este capítulo. Es posible, en cambio, ilustrar algunos de los problemas que surgen para la concertación laboral en uno u otro caso. Para resolver el punto recurriremos a dos casos comparativos: el de Francia y el de Italia en el período de postguerra. Ambos países se caracterizan —a la inversa del Norte de Europa— por contar con un sistema de partidos configurado alrededor de ideologías claramente diferenciadas y, especialmente, por la existencia de Partidos Comunistas fuertes. ¿Cómo condiciona ello las perspectivas de la participación y la concertación laboral?

## EL CASO DE FRANCIA

El caso de la Francia de postguerra es ilustrativo de una situación caracterizada por la presencia de un Partido Comunista ortodoxo y maximalista que hegemoniza su control sobre la CGT, central única hasta 1947. La central se rompe con posterioridad a ese año por el impacto de la polarización internacional sobre el PC y las otras fuerzas políticas.

A partir de ese momento, la CGT se convierte en una “co-rea de transmisión” del Partido Comunista francés. Sus objetivos se van ajustando a la meta última, que es el éxito político del PC en Francia. La unidad sindical es una función de la estrategia política del partido: se persigue tenazmente cuando es necesaria, como en 1972, para alcanzar la Unidad de la Izquierda, sólo porque éste es el objetivo fundamental. Cuando la meta no parece posible, como ocurre efectivamente por conflictos entre el PC y el PS, la unidad sindical deja a su vez de ser importante.

La política sindical frente a la crisis económica mundial es indicativa del enfoque. La crisis económica ocurre en un momento en que, por primera vez desde los años cincuenta, exis-

ten expectativas de poder para la izquierda francesa. La CGT hace uso de la crisis para denunciar los intentos de “reformismo” y de “colaboracionismo”, que atribuye a las otras centrales sindicales, y favorece, en cambio, la confrontación global con el gobierno a través de los “Días de Acción”, jornadas de protesta masiva tendientes a polarizar las bases sindicales para politizarlas y allegar aguas al “Programa Común” de la izquierda.

La movilización cumple, entonces, la función de agudizar las contradicciones, orientando la energía y los recursos políticos de la organización sindical hacia la política. La consecuente confrontación entre un movimiento sindical radicalizado y un gobierno de derecha antisindicatos obliga a las centrales no comunistas a sumarse, en forma subordinada, a la estrategia de la CGT contra el gobierno. Indirectamente alimentan así la polarización y el fortalecimiento de la izquierda.

La concepción ideológica que hay detrás de esta estrategia del PC francés es bien conocida: colaborar a la “administración” de la crisis del capitalismo sería pernicioso para la clase obrera porque, en definitiva, nada cambiaría para ella si no cambia el poder del Estado.

El argumento es racionalizado, en el caso francés, a través de tesis globales deterministas que van cambiando en el tiempo. En los años cincuenta, la tesis es la de la pauperización inevitable de las masas en el capitalismo. Desde los años sesenta —y dada la evidente prosperidad y progreso de la economía y del nivel de vida de los trabajadores franceses— esta tesis deja lugar a la del “capitalismo monopolista de Estado” que conduce a Francia, también inevitablemente, a un colapso económico. Si no se elimina este sistema, mediante la toma del poder del Estado por parte de los “partidos obreros”, la crisis de la economía francesa se hará inmanejable.

Estas posturas del PC y —a través de él— de la CGT, se alimentan de un ambiente creado por el gaullismo, en que el gobierno francés desarrolla relaciones privilegiadas con los grandes conglomerados económicos y los incorpora a la programación económica, aplicando sistemáticamente una política

antiobrera y excluyente de las organizaciones sindicales. En este clima, las centrales empresariales también se polarizan, desconociendo a las organizaciones laborales y reduciendo a su mínima expresión la negociación colectiva con los sindicatos.

Se establece así una correlación estrecha entre la polarización política y la radicalización en las relaciones industriales. El manejo de la crisis económica se convierte en una guerra ideológica y en una expresión más de la lucha de clases.

La incorporación de las organizaciones sindicales a esta guerra ideológica termina debilitándolas en su quehacer más propio. Los trabajadores en la base se cansan de esperar el gran cambio político y no advierten, por otra parte, que la organización sindical esté especialmente preocupada por los problemas cotidianos y concretos que ellos enfrentan. Las centrales sindicales pierden afiliados, poder e influencia. Sólo la volverán a adquirir, y transitoriamente, al acercarse la próxima campaña electoral, en que “los intereses del pueblo” estarán una vez más en juego, a través de la candidatura de la Unión de la Izquierda.

## EL CASO DE ITALIA

La respuesta del movimiento sindical italiano a la crisis económica de los años setenta es sustancialmente diferente a la observada en el caso francés. Las diferencias se explican —en un grado significativo— por la trayectoria diferente del PC italiano en el período de postguerra.

Ya en 1956 el PCI denuncia el stalinismo y publica su “Declaración Programática”, que postula un enfoque de reformas estructurales graduales en un contexto democrático en lugar de una estrategia revolucionaria de asalto al poder del Estado. Ello constituye a su vez el punto de partida de un proceso gradual de aceptación, por parte del PCI, de una autonomía relativa de la central sindical que controla —la CGIL—. La evolución culmina a comienzos de los setenta, después del

“Otoño Caliente ” de 1969, con la formación de una “Federación” que agrupa a las tres centrales sindicales ideológicas.

Este paso de unidad en la acción —logrado en 1972— es posible sólo después que cada una de las centrales ha obtenido un grado significativo de autonomía respecto de sus referentes políticos. Opera, además, en un contexto de significativa desideologización en la forma sindical de enfrentar los problemas y reivindicaciones obreras.

Es decidor que, en 1972, el PCI acepte el principio de incompatibilidad entre el ejercicio de cargos directivos en los partidos y en las centrales sindicales. Este es un reflejo práctico de la nueva convicción de que la autonomía de las organizaciones es un prerequisite para su integración en un organismo federado, que coordine sus acciones reivindicativas.

El otro factor determinante, en el caso de Italia, es el surgimiento de un referente político de centroizquierda que administra el gobierno, casi sin interrupciones, desde 1963 hasta el presente. Allí conviven el PS y la DC, además de otros partidos de centroderecha y centroizquierda, en un esquema reformista que busca dar un espacio participativo real a las organizaciones laborales en las decisiones públicas.

Acicateado por el surgimiento, desde esta alianza política, de un proyecto sindical innovador —por cuanto enfatiza la participación y la descentralización de las negociaciones colectivas, basadas en reivindicaciones concretas más que en grandes cuestiones ideológicas— el PCI toma la decisión de moderar su propio proyecto y buscar la convergencia, en el plano político y en el sindical, con la centroizquierda.

Influyen en esta decisión los acontecimientos del llamado “Otoño Caliente”, de 1969, cuando las organizaciones sindicales de cúpula son totalmente sobrepasadas por un movimiento que surge desde la base sindical. Los obreros, que se toman las fábricas, reivindican poder para negociar descentralizadamente respecto de las materias concretas concernientes a las condiciones de vida en el lugar de trabajo.

La respuesta de los organismos de cúpula es desideologizar su acción, pasando desde los grandes planteamientos políticos

globales a un acercamiento real a la base sindical, proponiendo la descentralización en las negociaciones y buscando un enfoque más pragmático que reporte beneficios visibles al afiliado de base.

El otro efecto del "Otoño Caliente" es desnudar las raíces de la crisis de la estructura sindical. Los que se toman las fábricas son trabajadores jóvenes, pobres y sin oficio del Sur del país, que migraron a las zonas industriales del Norte, donde trabajan en condiciones precarias y notablemente inferiores a las de la fuerza de trabajo más antigua. El desborde de las organizaciones se produce, entonces, por la existencia de una heterogeneidad laboral que es reflejo, a su vez, de las profundas desigualdades en el grado de desarrollo del Sur respecto del Norte del país. Esta situación se origina en el retraso agrícola del Messogiorno, en la industrialización desigual de la Italia de postguerra, en la insuficiencia estructural de la economía para proveer de empleos estables a los jóvenes y en la ineficacia del gobierno para dar respuesta a estos problemas.

Las organizaciones sindicales de cúpula, entendiendo que estos factores están detrás de su propia crisis organizacional, cambian el foco de su acción y de sus demandas. Respecto de la base, como ya se ha dicho, reaccionan otorgando más autonomía y libertad. Hacia el gobierno y el país, levantan una propuesta de reforma en la estrategia de desarrollo vigente.

La plataforma reformista plantea al gobierno la necesidad de que adopte medidas concretas para reducir las desigualdades entre las diversas regiones, para la creación de empleos para jóvenes en el Sur, para aumentar la inversión pública, para la capacitación, a fin de reducir la heterogeneidad de la fuerza de trabajo, y para apoyar a los sectores rezagados y la reconversión industrial.

Las demandas sindicales cotidianas comienzan a reflejar estos objetivos. Solicitan, por ejemplo, la descentralización del sistema de salud, la reducción del número de alumnos por curso en las escuelas, el aumento de los gastos en vivienda y la superación de los derroches y la ineficiencia en el aparato estatal.

Este cambio de foco en la demanda laboral lleva inevitablemente al movimiento sindical a interesarse prioritariamente por participar en el diseño de las políticas estatales en algunas de estas áreas y, especialmente, en las decisiones de inversión. El paso principal hacia un reenfoque —reformista y concertado— de la relación del movimiento sindical con el Estado ya está dado.

Esta tendencia se ve fortalecida por la necesidad de enfrentar la grave crisis de la economía italiana en los años setenta. Las dificultades ponen en peligro la estabilidad política del país, fortaleciendo a las fuerzas neofascistas y de la extrema derecha e incrementando el terrorismo.

La respuesta del PCI en esta coyuntura es rápida: denuncia el terrorismo y el fascismo y busca el “compromiso histórico” con la DC, colaborando al diseño de una política reformista, de austeridad y sacrificios compartidos. En 1977 es Berlinguer quien apoya con más fuerza una política económica de disciplina en los salarios.

La moderación laboral es sostenida tanto por la centroizquierda como por el Partido Comunista. La despolarización y convergencia en el sistema de partidos, su relación de “cooperación en lugar de confrontación”, facilita una concertación exitosa entre organizaciones sindicales y gobierno.

## EL CASO CHILENO: HETEROGENEIDAD SINDICAL Y POLITICA

Un estudio reciente del movimiento sindical chileno, durante el régimen autoritario, elaborado por Gonzalo Falabella, descubre seis lógicas de acción y estrategias diferenciadas en su seno: una tendencia que el autor llama “nacional-autónoma”, que incluye al Comando Nacional de Trabajadores (CNT) y especialmente a los sindicatos del cobre y del petróleo; una corriente “ideológica no clasista”, donde estarían los grandes servicios del Estado y otros sindicatos representados por la Central Democrática de Trabajadores (CDT); otra “nacional-

clasista”, donde se encontrarían aquellas federaciones de influencia comunista de la Coordinadora Nacional Sindical: mediana y gran industria tradicional (metalúrgica, textil, construcción); una “sectorial autónoma”, que representaría a trabajadores de la pequeña industria tradicional (molineros, cuero y calzado); otra corriente que el autor designa como “capa autónoma”, representada por la CEPCH y que incluye a los empleados particulares de todas las tendencias; y finalmente el sindicalismo “oficialista”, con influencia en el acero, el salitre y parte del carbón.

En un estudio anterior de Campero y Cortázar se detectaban al menos dos lógicas de acción en el movimiento sindical chileno. La primera incluía a las grandes empresas modernas, donde se emplea tal vez un tercio de la fuerza de trabajo sindicalizada. Este sector favorecía la negociación colectiva al nivel de la empresa y procuraba como objetivos principales la estabilidad en el empleo y un más amplio desarrollo en los sistemas de bienestar provistos por la empresa a sus trabajadores.

Estas empresas eran dirigidas por una tecnocracia gerencial moderna, proclive al diálogo con los sindicatos y a la integración del trabajador “con la camiseta de la empresa”. Los trabajadores de estas empresas —cobre, acero, petróleo, IANSA, servicios estatales (FF.CC.), papel, etc.— no se agrupaban en centrales sindicales de carácter nacional. Se entendían directamente con los niveles gerenciales o con el Estado, a través de su influencia política. Su lógica favorecía la integración a la empresa y procuraba la movilidad y el ascenso dentro de ella. Políticamente, estos trabajadores eran mayoritariamente centristas.

En el otro sector, la administración pública, las empresas medianas y pequeñas, y actividades como la construcción (en general, empresas menos modernas, de tecnología inferior, menos tecnificadas en su dirección), se agrupaba un conjunto de sindicatos débiles al nivel de empresa, que perseguían aumentar su fuerza a través de su agrupación en federaciones sindicales. Estas entidades realizaban la negociación colectiva para toda



la rama. Así ocurría en las áreas textil, metalúrgica, de panificadores, del cuero y calzado, la gráfica y la construcción.

En estos sectores, la negociación era altamente conflictiva. Las organizaciones —de tendencia de izquierda con predominio PC— seguían una lógica confrontacional y politizada. A menudo planteaban demandas globales de carácter político, apelando a cambios estructurales profundos, a la nacionalización de los monopolios, etc.

De estos estudios puede concluirse —como por lo demás lo hacen sus autores— que una característica permanente del sindicalismo chileno ha sido su diversidad, más que su tendencia a la homogeneidad. Pareciera ser un hecho, también, que esa diversidad ha ido en aumento, como se concluye del primero de los estudios recién citados. La diversidad se origina en situaciones estructurales (sector de actividad, tamaño de la empresa, etc.) y es influida decisivamente también por la heterogeneidad del espectro político chileno, puesto que en Chile los partidos siempre han tenido una fuerte injerencia en las organizaciones laborales.

## UNIDAD Y AUTONOMIA SINDICAL

La herencia de una economía cuya heterogeneidad estructural ha ido en aumento; donde los segmentos modernos de alta productividad han incrementado su distancia respecto del resto del aparato productivo y donde la exclusión a través del desempleo y del aumento de las actividades marginales ha sido dramática, son factores que dificultan un movimiento hacia la unidad orgánica de los trabajadores chilenos. El cuadro se complica si se atiende al deterioro de la afiliación sindical, que ha caído a un tercio de sus niveles históricos.

Por otra parte, la fragmentación en el espectro político de la oposición, agravada por la militarización de la política del PC, es un factor adicional que no puede dejar de repercutir en los intentos unitarios en el seno del movimiento sindical.

Considerando esas condicionantes estructurales es bastante probable que la acción sindical en Chile mantenga una diferenciación que eventualmente se expresará en una variedad de organizaciones de nivel intermedio e incluso nacional.

Si por las razones argumentadas anteriormente no fuera posible una unidad orgánica del movimiento sindical ¿es dable pensar en una convergencia programática y de acción? Las experiencias de Francia e Italia son llamativas, en el sentido de sugerir un camino en que esa unidad programática y de acción —expresada incluso en un organismo único cupular, coordinador de las varias centrales existentes, como es el caso de Italia— puede darse, mantenerse y fortalecerse a través del tiempo.

Para encontrar un terreno común de acuerdo real las organizaciones sindicales tienen que —en primer lugar— conquistar una mayor autonomía y perfil propio respecto de los partidos. Esto vale especialmente respecto de los partidos de la izquierda leninista, que es la que plantea la tesis del sindicato como “correa de transmisión”. Si estos partidos sólo procuran reafirmar una relación manipulativa es altamente probable que eso divida y fraccione al movimiento sindical, forzando a quienes discrepan de dicha influencia a abandonar la organización unitaria.

La autonomía relativa es, por lo tanto, condición indispensable para la existencia de un ente coordinador unitario de los trabajadores. En otras palabras, la heterogeneidad, la diversidad de situaciones y el pluralismo político existentes tienen que respetarse, sin buscar imponer hegemonías uniformadoras.

Hay partidos que tienen una responsabilidad clave en este sentido. Los casos de Francia e Italia muestran, hasta la saciedad, cómo las diferentes líneas políticas en los PC de esos dos países influyeron decisivamente en el perfil del movimiento laboral, en las posibilidades de unidad sindical y en las perspectivas de un sindicalismo nuevo, con propuesta propia, incorporado como actor principalísimo a la tarea de desarrollar el país.

Es útil recordar que el camino de la unidad sindical en la acción fue bastante complejo en Italia. En 1945 surgen un gobierno nacional de reconstrucción y una unidad sindical con hegemonía comunista. Esta se rompe en 1947. Se crean entonces tres centrales que siguen caminos divergentes. Lo que posibilita su convergencia y eventual unidad de acción, en los setenta, es su capacidad de autonomizarse de los partidos, de desideologizarse y de buscar un proyecto propio, concreto, que se traduce en una propuesta de modificación de la estrategia de desarrollo nacional. Para ello se demanda la participación en las decisiones públicas bajo un organismo coordinador común, flexible, y que no obliga en cada acción a cada central. En esta trayectoria, la evolución del propio PCI hacia posturas reformistas y de “compromiso histórico” con las fuerzas del centro político es decisiva.

## EL DESBORDE POR LA IZQUIERDA Y LA UNIDAD SINDICAL

El dilema sindical chileno es especialmente agudo para el PC, porque es probable —dada la actual configuración de fuerzas sindicales— que la unidad no sea posible, de no mediar un cambio en la línea política de ese partido. Si su objetivo sigue siendo, cuando se conquiste la democracia, el de pasar directamente “de la revolución antifascista sin muralla china a la democracia avanzada con miras al socialismo, según los modelos de Cuba y Nicaragua”, entonces su acción política post-dictadura estará marcada por un intento radicalizador de situaciones para el cual las organizaciones sindicales serían el más útil instrumento.

En efecto, el deterioro económico y la acumulación de demandas insatisfechas hacen extremadamente fácil exacerbar la crisis lanzando a los trabajadores a un reivindicacionismo sin autorrestricciones. Debilitar al primer gobierno democrático por esta vía parece una tarea simple. Es la tesis del “desborde por la izquierda”. Pero esa manipulación de los trabajadores en

pos del objetivo último de transitar desde la democracia burguesa hacia la “democracia avanzada” pasa, obviamente, por la división irremediable y profunda del movimiento sindical. De allí el dilema para el PC.

Por otra parte, el conjunto de las fuerzas políticas democráticas va a estar funcionando predominantemente con una lógica de reconstrucción del país y de su economía. Por esa razón, seguramente, se embarcará en un intento consciente por reforzar la precaria estabilidad democrática. En ese contexto habrá esfuerzos continuos por propiciar una moderación en las demandas, a través de una vía consensual. ¿Tendrá el PC la flexibilidad suficiente para tender puentes hacia estas posturas, moderando su conducta política? La respuesta es decisiva no sólo para la estabilidad del país. También lo es para las perspectivas de un movimiento sindical fuerte y convergente en sus intereses.

## UN SINDICALISMO RENOVADO CON PROPUESTA PROPIA

Cualquiera sea la línea que siga el PC en estas materias, es claro que el desafío para los trabajadores democráticos consiste en construir un sindicalismo renovado con personalidad propia. Un movimiento capaz de afirmar su autonomía en la práctica y, sobre todo, propiciador de una propuesta propia de carácter nacional, aunque desde la perspectiva y la experiencia de los trabajadores durante la dictadura, que recoja las lecciones de esa experiencia y las proyecte a futuro.

Una propuesta de carácter nacional tiene que incorporar necesariamente los cambios que han ocurrido en los últimos quince años. Las transformaciones han tocado la estructura de la economía chilena y también la economía internacional, puesto que en este período se ha gestado una “segunda revolución industrial” en los países desarrollados. Hemos visto, además, que las democracias del Atlántico —Argentina, Brasil, Uruguay— inician un ambicioso plan de cooperación e integración económica. Sabemos, por último, que el problema de la

deuda externa enmarcó restrictivamente los grados de libertad para resolver los problemas acumulados y para crecer hacia el futuro. Este es el mundo frente al cual los sindicatos tienen que tener una propuesta para ser dialogada con otros sectores de la vida nacional y, ciertamente, con los partidos políticos.

Una propuesta de los trabajadores para las próximas décadas, entrando ya al siglo XXI, tendría que plantearse algunos temas fundamentales. Cuál será el lugar del trabajo en la modernización industrial; en el nuevo tipo de empresas que se va a requerir (más participativas y con equipos humanos que cooperan entre sí, más que basadas en las tradicionales relaciones de dependencia vertical). Qué participación tendrán los trabajadores en las nuevas estructuras más descentralizadas de las instituciones públicas. Cómo se logrará su incorporación de actor político participativo, como miembro con plenos derechos de la clase dirigente nacional.

Estos son los desafíos fundamentales.

Para avanzar hacia allá las organizaciones sindicales tendrían que abrirse al diálogo con los otros sectores de la vida nacional; tendrían, además, que fortalecer los contactos, convergencias y consensos con los grupos con los cuales van a tener que construir ese país nuevo y modernizado.

Para ese proyecto no servirán tesis puramente obreristas, o patronales, o campesinas, o juveniles. El sindicalismo deberá buscar en estas propuestas el terreno común; rescatar siempre lo nacional, aquello que lo une con los otros en un destino a compartir. El rescate de los temas nacionales por parte de cada grupo y sector es, a su vez, el comienzo —sobre una base real— del reencuentro nacional.